



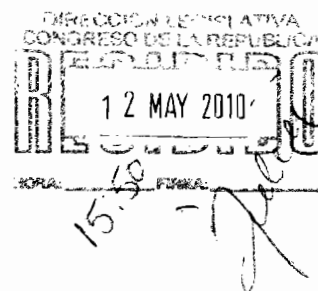
-000013-

*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

12 de mayo de 2010

Señor  
Marvin Alvarado  
Encargado del Despacho  
Dirección Legislativa  
Congreso de la República  
Su Despacho



Señor Alvarado:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE**, emitido en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el día veinte de abril/10, de la Iniciativa de Ley No. 4021, que dispone aprobar **LEY DE EXTINCION DE DOMINIO**.

Sin otro particular, atentamente,

  
Diputado Oliverio García Rodas  
Presidente de la Comisión



COMISION DE LEGISLACION  
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.

cc. arch.

Se adjunta versión electronica.



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

**DICTAMEN NÚMERO 03-2010**  
**INICIATIVA 4021**

**LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

**HONORABLE PLENO:**

Con fecha 14 de abril del año 2009, se dio lectura a la Iniciativa de Ley con número de registro **4021**, **Ley de Extinción de Dominio**, la cual fue presentada por los representantes Mariano Rayo Muñoz y José Alejandro Arévalo, trasladando la misma a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y dictamen correspondientes.

**I. ANTECEDENTES:**

Durante los últimos años, en Guatemala se ha experimentado una pérdida de valores sociales como producto de la búsqueda de dinero fácil promovido por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el lavado de activos, el contrabando, el robo de vehículos, trata de personas, las estafas y otros delitos que generan enormes ganancias financieras. A eso se le suma la problemática de corrupción que afecta el desempeño del Estado. En otras palabras, Guatemala ve cómo crece una economía criminal, la cual no sólo se enraíza en ciertas regiones del país, sino busca como entrelazarse con todos los sectores económicos legítimos y legales del país. Los datos más recientes sobre la economía criminal en Guatemala, muestran que la misma alcanza un monto anual creciente de treinta y cinco mil millones de quetzales (Q.35,000,000,000.00).

El enriquecimiento ilícito y delictivo ha sido un factor de corrupción social en Guatemala, no sólo por lo que implica la comisión del delito en sí misma, sino porque quienes cometen estos delitos y otros vinculados al crimen organizado, hacen ostentación ante los demás con bienes que en verdad no les pertenecen y no fueron obtenidos como fruto del trabajo y esfuerzo honrado. Esta realidad se ha extendido de tal manera que hoy atenta contra la propia estabilidad del Estado y de sus instituciones. De esta situación de impunidad se ha derivado un ejemplo letal para la comunidad. Un segmento de la población se siente desestimulado frente al esfuerzo de buscar sustento y progreso en



## *Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

actividades legales, cuando ve expuesto ante sus ojos esas riquezas conseguidas en forma fácil y rápida por quienes infringen la ley. Desde este punto de vista, la propiedad criminal o ilícitamente adquirida atenta contra los principios constitucionales relativos al uso y disfrute de los bienes para que sirvan al progreso individual de las personas y al desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos<sup>1</sup>.

En distintas épocas y dentro de sus responsabilidades nacionales y compromisos internacionales, el Congreso de la República ha buscado instrumentos jurídicos que conduzcan a evitar el incremento de los patrimonios adquiridos ilícita o criminalmente y permitan al Estado declarar la pérdida de los bienes así adquiridos. Sin embargo, diversas situaciones han impedido que esos instrumentos sean eficaces para determinadas formas de criminalidad y la acumulación de riqueza de origen ilícito o delictivo.

En este orden de ideas, los instrumentos internacionales siguientes, han sido aprobados y ratificados por el país:

- a) Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Fue suscrita el 20 de diciembre de 1988, aprobada por el Congreso de la República mediante Decreto número 69-90 y ratificada por el Presidente de la República el 27 de diciembre de 1990. El Instrumento de Ratificación fue depositado el 28 de febrero de 1991 ante la Secretaría General de las Naciones Unidas y entró en vigor para Guatemala el 29 de mayo de 1991.
- b) Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Fue suscrita el 12 de diciembre de 2000, aprobada por el Congreso de la República mediante Decreto 36-2003 y ratificada por el Presidente de la República el 18 de septiembre de 2003. El Instrumento de Ratificación fue depositado ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2003 y entró en vigor para Guatemala el 25 de octubre de 2003.
- c) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Fue suscrita el 9 de diciembre de 2003, aprobada mediante Decreto número 91-2005, ratificada por el Presidente de la República el 4 de enero de 2006. El instrumento el Instrumento de Ratificación fue depositado ante la Secretaría General de las

<sup>1</sup> Artículo 39, párrafo segundo, de la Constitución Política de la República. "...El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales  
Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

Naciones Unidas el 3 de noviembre de 2006, la Convención entró en vigor para Guatemala el 3 de diciembre de 2006.

Así también es necesario mencionar la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual fue signada por el país en 1996 y que entró en vigor en el año 2001. Por supuesto también importante en este contexto, es el Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos de 1997.

El Comiso de objetos e instrumentos del delito, en su actual regulación como pena principal o accesoria<sup>2</sup> o aún como comiso sin condena, no proporciona a las autoridades encargadas de la investigación y la persecución penal los medios necesarios para identificar y sustraer del patrimonio de una persona los bienes, producto del delito o de las ganancias ilícitas o delictivas, ni constituye una reacción adecuada contra el poder económico de ese tipo de delincuencia.

El comiso, sin condena o como sanción penal, se ha dirigido siempre contra la persona sometida a proceso y no justamente contra el patrimonio; tampoco se puede imponer a las personas que aunque no culpables del delito si se han beneficiado con conocimiento del origen de ese patrimonio.

Además, el estado jurídico-legal actual vigente en materia de comiso no permite determinar adecuadamente el uso o destino equitativo de los bienes y dinero incautados o decomisados, ni su administración eficiente. Muchos de esos bienes incautados se han deteriorado en espera de una sentencia, perdiendo toda utilidad y posibilidad de utilización en beneficio social.

El Estado guatemalteco necesita consecuentemente nuevas herramientas como la extinción del dominio o la privación definitiva de bienes ilícita o criminalmente adquiridos.

<sup>2</sup> Artículos 60 del Código Penal: COMISO. El comiso consiste en la pérdida, a favor del Estado, de los objetos que provengan de un delito o falta, y de los instrumentos con que se hubieren cometido, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se acordará el comiso, aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del imputado. Los objetos decomisados de lícito comercio, se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial.

Artículo 8 de la Ley contra el Lavado de dinero u otros activos: **Del comiso de bienes.** Para los efectos de esta ley el comiso consiste en la pérdida a favor del Estado de los bienes, instrumentos o productos utilizados o provenientes de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, declarada en sentencia, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se ordenará el comiso aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del sindicado o acusado o se ignore quién es la persona responsable del delito.



## Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República  
Guatemala, C.A.

o adquiridos con dineros provenientes de actividades ilícitas o hechos delictivos, así como de las ganancias, frutos y utilidades procedentes o derivados de esos bienes. También es necesaria la privación rápida de los instrumentos y objetos que, en manos de los delincuentes, constituyen un grave peligro para la sociedad debido a su utilización en la ejecución de los delitos o que puedan serlo en el futuro para la comisión de nuevos delitos.

El ejercicio de la acción de extinción de dominio permitirá al Estado eliminar o al menos reaccionar adecuadamente contra la principal motivación de la criminalidad: la obtención de grandes ganancias ilícitas o delictivas, y a la acumulación desmedida de riquezas patrimoniales proveniente de actividades ilícitas o hechos delictivos. Es así que, para repudiar y erradicar toda fuente de riqueza ilícita o criminal, es imperativo que el Estado pueda, mediante resolución judicial, declarar la privación definitiva o la extinción de dominio sobre dichos bienes, frutos y ganancias, o de aquellos bienes adquiridos en perjuicio de la administración pública o de los bienes estatales. En especial, la privación de aquellos que desde un primer momento se puedan relacionar fehacientemente con la delincuencia o el enriquecimiento injustificado o ilícito, ya sea de los principales beneficiarios o de terceras personas relacionadas con los delincuentes, así como el enriquecimiento injustificado de personas directamente y de personas que actúan en connivencia con éstos.

La *Acción de Extinción de Dominio* **NO** se dirige contra las personas para sancionarlas penalmente ni para reclamar responsabilidades civiles por el delito, pues ello pertenece al ámbito del Derecho Penal. Esta acción se dirige exclusivamente contra la forma -ilícita o delictiva- de apropiación, disposición o de tráfico de bienes que provienen de actividades ilícitas o delictivas, o contra las ganancias derivadas de éstos que constituyen un enriquecimiento indebido que ningún Estado democrático puede permitir. Ciertamente, la Constitución de la República garantiza el derecho a la propiedad y a disponer libremente de sus bienes, pero lo condiciona a que se haga de conformidad con la ley<sup>3</sup>.

Formal y materialmente, aunque la adquisición o puesta en circulación de los bienes se realicen dentro de un contexto ilícito o criminal, no cambia en nada la naturaleza civil o mercantil relativa al dominio sobre las cosas, por lo que, desde el punto de vista jurídico, los actos, negocios o contratos a través de los cuales se ha acumulado el patrimonio

<sup>3</sup> Artículo 39, primer párrafo, de la Constitución de la República de Guatemala: "*Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.*"



## Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República  
Guatemala, C.A.

indebido o criminal se encuentran afectados de nulidad absoluta, desde el momento mismo en que se realizan, y no pueden producir efecto jurídico alguno ni pueden ser revalidados legalmente bajo ningún concepto ni siquiera por el paso del tiempo, pues desde cualquier óptica son contrarios al orden público, el interés social y a las leyes prohibitivas.<sup>4</sup>

Es dentro de este orden ideas que la institución de *Extinción de Dominio* debe entenderse como la pérdida o privación definitiva de los derechos reales y accesorios ilícitos o criminalmente adquiridos, a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular, poseedor, usufructuario, tenedor u otra forma relativa al derecho de dominio.

Con esta ley de Extinción de Dominio se pondrá a disposición de las autoridades encargadas de prevenir y combatir la delincuencia organizada y otros actos delictivos en todas sus expresiones y contra la corrupción dentro de las esferas de la sociedad, un instrumento que sirva para eliminar normativamente y judicialmente la riqueza ilícita o criminal; evidentemente mediante un procedimiento que garantice protección a los derechos constitucionales y legales de las personas que pudieran resultar afectadas injustamente por la acción de extinción de dominio.

La figura de la Extinción de Dominio –cuyos antecedentes se remontan al Derecho Agrario y Ambiental– y a otras figuras contenidas en nuestra legislación, no debe confundirse con otras instituciones jurídicas, como la Confiscación o la Expropiación de bienes, porque formal y sustancialmente son diferentes.

La *confiscación* es un acto jurídico que implica la cesación del derecho adquirido en forma lícita sin ninguna compensación, por lo que se prohíbe constitucionalmente. En cuanto a la *expropiación* constituye un negocio jurídico impuesto por el Estado por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público (artículo 40 de la Constitución Política de la República), que tiene por objeto la transferencia de dominio de bienes adquiridos en forma lícita, siguiendo un procedimiento específico determinado en la ley de la materia<sup>5</sup> y previo pago de indemnización.

<sup>4</sup> Artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial: "**Actos nulos.** Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir"

<sup>5</sup> Ley de Expropiación, Decreto número 529 del Congreso de la República.



## Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República  
Guatemala, C.A.

La extinción de dominio debe igualmente distinguirse de la figura del *Comiso* establecida en el artículo 60 del Código Penal<sup>6</sup> y en otras leyes especiales<sup>7</sup>, así como de las *responsabilidades civiles* derivadas del delito. Ambas posibilidades se realizan dentro del proceso penal y generalmente se declaran en la sentencia penal respectiva. El comiso recae únicamente en los objetos e instrumentos del delito y generalmente se condiciona a la culpabilidad del procesado; mientras que la acción de extinción de dominio se sustanciará en un proceso autónomo, con reglas sustantivas y procesales totalmente diferentes a las del proceso penal o civil, y se dirigirá contra todo patrimonio ilícito o delictivo, se encuentre o no bajo el dominio del delincuente o de la persona que se haya enriquecido indebida o ilícitamente.

A diferencia de las instituciones jurídicas arriba definidas, cabe reiterar que la figura de extinción de dominio implica la pérdida definitiva del derecho real o accesorio, a favor del Estado sin ninguna contraprestación económica para su titular, y ello, en virtud del origen ilícito o del aumento no justificado del patrimonio del delincuente y de las personas a él vinculadas o de los empujados, servidores o funcionarios públicos que hayan realizado actos de corrupción o en fraude a la ley.

La extinción de dominio cabe entonces en nuestro marco legal y constitucional en la medida en que, como principio social y estatal, constituye una reacción contra toda forma de enriquecimiento indebido, ilícito o delictivo, por su efecto desestabilizador a todo el sistema legal de adquisición y circulación de bienes, y que por lo tanto, constituyen actividades de naturaleza civil y mercantil que atentan contra orden público, el interés

<sup>6</sup> Artículo 60 del Código Penal: "El comiso consiste en la pérdida, a favor del Estado, de los objetos que provengan de un delito o falta, y de los instrumentos con que se hubieren cometido, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se acordará el comiso, aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del imputado. Los objetos decomisados de lícito comercio, se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial."

<sup>7</sup> Artículo 18 de la Ley contra la Narcoactividad: **Artículo 18. Comiso.** Caerán en comiso las armas, objetos, dinero, vehículos inmuebles o valores empleados en la ejecución de los delitos establecidos en esta ley, así como los que sean derivados de los mismos o se adquieran con valores obtenidos en la comisión de tales delitos.

Los bienes decomisados de lícito comercio se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial, pero serán destinados especialmente a la lucha y prevención de los delitos a que se refiere esta ley. Se exceptúan los bienes a que se refiere el Artículo 57 de la presente ley, los cuales pasarán a formar parte del patrimonio de la Policía Nacional Civil.

Artículo 8 de la Ley contra el Lavado de dinero u otros activos: **Artículo 8. Del comiso de bienes.** Para los efectos de esta ley el comiso consiste en la pérdida a favor del Estado de los bienes, instrumentos o productos utilizados o provenientes de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, declarada en sentencia, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho.

Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se ordenará el comiso aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del sindicado o acusado o se ignore quién es la persona responsable del delito.



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

social y constituyen conductas contrarias a las leyes prohibitivas y al sistema jurídico del país.

El Estado, mediante esta ley, crea una figura que a diferencia de la confiscación, mantiene la protección de los derechos de terceros no responsables y de aquellos que de buena fe, que no hayan actuando con culpa o simulación, se hayan favorecido de ese tipo de bienes o ganancias; pero, eso sí, que permita eficazmente tomar medidas legales concretas contra el producto ilícito o de la criminalidad, principalmente la organizada, con el fin de impedir, disuadir y destruir sus capacidades criminales, como una reacción legítima del Estado contra toda fuente de enriquecimiento por fuera de la ley o en fraude a la misma<sup>8</sup>. Su finalidad es la de, por un lado, proteger a los ciudadanos honestos, probos y de buenas costumbres y, por el otro, desestimular el efecto nocivo e inconsecuente en la sociedad de la riqueza indebida.

La iniciativa de ley propone restringir el acceso de las organizaciones delincuenciales y sus miembros a los activos y recursos financieros, originados de cualquier actividad ilícita o delictiva, sea cual fuere el mecanismo a través del cual se movilizan los recursos dentro del sistema económico y financiero y del tráfico jurídico de bienes. Por lo tanto con el nuevo decreto se acelerarán los procesos de extinción de dominio tendientes a lograr la eficacia de los fines del Estado.

Sobre las bases de estas consideraciones, esta ley formaría parte de una política criminal integral de combate al narcotráfico, y otras formas graves de criminalidad y del enriquecimiento ilícito o indebido de ciertas personas, así como el control del lavado de activos y de la corrupción.

***Diferencias entre el decomiso penal y el de activos sin condena***

Acción

Decomiso penal

Decomiso de activos sin condena

Contra la persona (*in personam*): parte del cargo penal contra una persona.

Contra la cosa (*in rem*): acción judicial instaurada por un gobierno contra la cosa.

<sup>8</sup> El artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, en su párrafo segundo dice: *Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o con contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude a la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.*





*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales  
Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

¿Cuándo tiene lugar?	Impuesto como parte de la sentencia en el caso penal. Requiere condena penal.	Instaurada antes, durante o después del decomiso penal o aun si no existe cargo penal en contra de la persona.
Probar la conducta ilegal	Requiere condena penal. Tiene que establecerse la actividad criminal "más allá de toda duda razonable", o convicción íntima".	Condena penal no requerida. Tiene que establecerse una conducta ilegal con base en un estándar de prueba de "balance de probabilidades" (el estándar puede variar).
Vínculo entre los productos y la conducta ilegal	Basado en el objeto o en el valor.	Basada en el objeto.
Decomiso	Interés del defensor del decomiso en la propiedad.	Decomisar la cosa misma, sujeta a propietarios inocentes.
Jurisdicción	Varía (criminal o civil).	Varía (derecho penal o civil).

El decomiso de activos sin condena o extinción de dominio es útil en una variedad de contextos, particularmente cuando no es posible el decomiso penal, o no está disponible, como sucede en los ejemplos siguientes:

- El delincuente es un fugitivo o no se le localiza y la condena penal no es posible si el acusado es un fugitivo.
- El delincuente está muerto o muere antes de la condena. Con la muerte finalizan los procesos penales.
- El delincuente es inmune al proceso penal.
- El delincuente es tan poderoso, como en el caso de los narcotraficantes, que una investigación o proceso penal es irreal o imposible.
- El delincuente es desconocido y se hallan los activos (por ejemplo, activos hallados en las manos de un mensajero no involucrado en el delito penal). Si el activo se deriva del crimen, un propietario o delincuente puede no estar dispuesto a defenderse en procesos de civiles de recuperación por temor a que esto le



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

conduzca a un proceso penal. Esta incertidumbre hace que sea muy difícil, si no imposible, un proceso penal contra un delincuente.

- La propiedad pertinente la mantiene un tercero que no ha sido acusado de delito penal, pero sabe —o se hace el desentendido de— que la propiedad está contaminada. Aunque el decomiso penal no puede llegar a la propiedad mantenida por terceros de buena fe, con el decomiso de activos sin condena o extinción de dominio, sí puede decomisarse sin una defensa de buena fe.
- Existe evidencia insuficiente para proseguir con un proceso penal.

En tales escenarios, el decomiso de activos sin condena o extinción de dominio es posible porque se trata de una acción *in rem* en contra de la propiedad, no de la persona, o no se requiere una condena penal, o ambas cosas.

De extrema importancia de aclarar es que el decomiso de activos sin condena o la extinción de dominio NO puede ni debe sustituir el proceso penal. Dispensar un proceso penal a favor del decomiso de activos sin condena socava la eficacia de la ley penal y la confianza del pueblo en la ejecución de la ley. Por tanto, aunque la extinción de dominio constituye una herramienta eficaz para recuperar activos o bienes conectados con el crimen, no debería emplearse como alternativa al proceso penal.

En otras palabras, no debe permitirse a los criminales evitar el enjuiciamiento señalando al sistema de decomiso de activos sin condena como mecanismo para buscar resarcir los delitos que se han cometido. Sacrificar un proceso penal, cuando pueda realizarse, a cambio del decomiso de activos sin condena da la apariencia de que un delincuente compre su salida del proceso penal. La reducción del crimen se asegura mejor, en general, con procesos penales, declaraciones de culpabilidad y decomisos. Así, los procesos penales deben proceder cuando quiera que sea posible con el fin de evitar el riesgo de que los fiscales, los tribunales y el público vean la entrega de activos como una sanción suficiente cuando se han violado las leyes penales.

El decomiso de activos sin condena o la extinción de dominio tiene que ser complementario a los procesos y condenas penales.

***Jurisdicciones con decomiso de activos sin condena y legislación pertinente***

Albania

Ley 9284 de 30 de septiembre de 2004 sobre



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

Antigua y Barbuda  
Australia  
Canadá  
(provincias)

Prevención y Combate al Crimen Organizado  
Ley sobre (Prevención de) Lavado de Dinero de 1996.  
Ley de Procedimientos sobre el Crimen de 2002  
Alberta: Restitución a las Víctimas y Ley de Pagos de  
Compensación, S.A. 2001, c. V-2.5 2001  
Columbia Británica: Ley de Decomiso Civil, S.B.C. 2005,  
c. 29

Manitota: Ley de Decomiso de Propiedad Criminal,  
C.C.S.M. 2004, c. C306.

Ontario: Ley de Remedios Civiles, 2001. S.O. 2001, c.  
28

Quebec: Una ley con respecto al decomiso,  
administración y apropiación de productos e  
instrumentos de la actividad ilegal, R.S.Q. c. C-52.2.

Saskatchewan: Ley sobre Decomiso de Propiedad  
Criminal, S.S. 2005, c. S-46.001.

Colombia

Ley 793 de 2002 (27 de diciembre) sobre la extinción  
del derecho de propiedad.

Ley 785 de 2002 (27 de diciembre) sobre la  
administración de activos congelados.

Eslovenia

Ley de Proceso Penal (8/2006 de 26 de enero de 2006),  
artículo 498a.

Estados Unidos

18 Códigos de Estados Unidos, secciones 981, 983,  
984, 985 (decomiso de activos NCB)

Fidji

Ley de Procedimientos sobre el Crimen de 1997,  
enmendada.

Filipinas

Ley Contra el Lavado de Dinero de 2001 (Ley de la  
República No. 9160, enmendada por la Ley de la  
República No. 9194), sección 12.

Reglas de procedimiento en casos de decomiso civil,  
preservación de activos y congelación de instrumentos  
monetarios, propiedad, o representación de productos,  
que incluyen o se relacionan con una actividad ilegal u  
ofensa de lavado de dinero bajo la Ley de la República  
No. 9160, enmendada (A.M. No. 05-11-04-SC 2005-11-  
14).

Guernsey

El decomiso de dinero, etc., en la Ley sobre



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

	procedimientos civiles (Alguacilazgo de Guernsey), 2007.
Irlanda	Ley de Procedimientos sobre el crimen, 1996 (No. 30/1996), enmendada en 2005 (No. 1/2005) Ley sobre la Oficina de Activos Criminales, 1996, enmendada.
Isla de Man	Ley de Procedimientos sobre el Crimen, 2008.
Israel	Ley de Prohibición de Lavado de Dinero, 5760-2000.
Jersey	Ley sobre Recuperación de Activos Civiles (Cooperación Internacional), 2007. Ley de Procedimientos sobre el Crimen (Incautación de Dinero), 2008 (prevé la ejecución de órdenes de decomiso de activos NCB extranjeros).
Liechtenstein	Código de Procedimiento Criminal (StPO) de octubre 18 de 1988, secciones 97a, 98, 98a, 253a, 353, 354, 356, 356a, 357. Código Criminal, secciones 20, 20a, 20b, 20c, 64, 165, 165a.
Reino Unido	Ley de Procedimientos sobre el Crimen 2002 (c. 29), secciones 240-316, 341-416. Ley de delitos graves, 2007 (c. 27), secciones 74-85. Ley sobre Crimen Organizado Grave y Policía, 2005 (c. 15), secciones 97-101, 245A-D, 255A-F.
Suiza	Código Penal, artículos 70-72.
Sudáfrica	Ley sobre Prevención del Crimen Organizado 121 de 1998, enmendada, secciones 37-62.
Tailandia	Ley contra el lavado de dinero de E.B. 2542.
México introdujo dentro de su ordenamiento legal vigente, la figura de extinción de dominio, con importes éxitos hasta la fecha, en el año 2009.	

## II. DESCRIPCION DE LA LEY:

A continuación se hará una descripción del contenido de la ley, particularmente sobre aquellos aspectos que requieren de una explicación técnica o de aspectos jurídicos



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

complejos, que permitan una comprensión de la materia y las finalidades de este novedoso cuerpo legal, que debe formar parte del ordenamiento jurídico guatemalteco.

Los Capítulos I y II de la ley que contienen normas de carácter general permitirán a los operadores de justicia conocer, comprender e interpretar adecuadamente la materia legislada, así como su naturaleza, los principios, sus alcances y límites, dando certeza y seguridad jurídica a su actuación oficial.

De estos capítulos cabe destacar que sustantiva y procesalmente la acción de extinción de dominio o decomiso de activos sin condena, se enmarca dentro de la naturaleza propia y exclusiva de los derechos relativos al dominio de las cosas y de la legalidad en el tráfico o circulación de los bienes susceptibles de apropiación y su disposición, separándose del Derecho Penal y Procesal Penal, excepto el recurso supletorio de este último en unos cuantos artículos relativos a la prueba.

La diferenciación material que se hace a través de este Decreto, es la que permite extender la definición de lo que constituye una actividad ilícita y delictiva a conductas no tipificadas penalmente, pero que pueden dar lugar a la acción de extinción de dominio en virtud de un incremento patrimonial injustificado de cualquier persona individual o jurídica que se haya beneficiado o que de una u otra manera puedan estar relacionadas con dichas personas y que se hayan beneficiado directa o indirectamente de los bienes o ganancias producto de la criminalidad o permitan su alzamiento o la simulación, así como de ciertas conductas atribuibles a empleados, servidores o funcionarios públicos o de las personas relacionados con éstos que fácticamente constituyen actos de corrupción o de una ilicitud o irregularidad administrativa, civil o mercantil, pero que por diversas razones esas conductas han quedado excluidas de los tipos penales.

Al definirse en el artículo 2 de esta ley el término "*Fondos derivados de la administración de Justicia*" que aparece en el segundo párrafo del artículo 213 de la Constitución Política de la República, se llena un vacío legislativo que permitirá resolver un problema que se ha suscitado a lo largo de los años en cuanto al uso y disposición de los bienes decomisados en virtud de actividades delictivas o hechos ilícitos. Hasta el presente, todos los bienes afectos al Comiso se han calificado como fondos privativos del Organismo Judicial por considerarse fondos derivados de la administración de justicia, y esto, debido a que, como lo ha señalado la Corte de Constitucionalidad en su sentencia del 1 de enero de 1998, dentro del expediente número 292-98, al no existir la definición o expresión constitucional concreta de qué es lo que deba entenderse o qué constituye "fondo derivado de la



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

administración de justicia", la tarea de determinarlo y definirlo se ha dejado al legislador mediante la ley<sup>9</sup>; pero, en el cuerpo legislativo existente aún no se ha realizado.

En efecto, al no haberse expresado concretamente en la Constitución de la República de Guatemala su significado, corresponde al Congreso de la República, conforme a sus atribuciones constitucionales, desarrollar dicha norma y es lo que en este Decreto se realiza para evitar la ambigüedad y el vacío legal.

El artículo 4 contiene la enumeración y precisión de las causales que dan lugar a la acción de extinción de dominio. Con ello se evitará cualquier arbitrariedad y dará seguridad y certeza jurídica a los operadores de justicia sobre la materia, permitiendo a cualquier persona interesada o que pudiera resultar afectada a oponerse en caso los derechos discutidos no se encuentren expresamente en esas cláusulas.

Respecto al artículo 6 de la presente ley, que establece la presunción legal de *que los bienes, dinero, productos, frutos o ganancias que hayan sido adquiridos o negociados, en cualquier tiempo, y que estén sometidos o puedan estar sometidos a la acción de extinción de dominio, provienen de las actividades ilícitas o delictivas de que se trate*, debe tenerse en cuenta, en primer lugar que esta presunción legal es congruente con la literal a), del artículo 3 de esta ley, en virtud de que la nulidad absoluta del acto, contrato o negocio del cual provienen los bienes de origen ilícito o delictivo se da desde el momento mismo de su nacimiento, incluso antes de la entrada en vigor de la presente ley. Constituye un principio de que el estado de nulidad y sus efectos de ésta son permanentes, se perpetúan hacia el futuro y permanecen hasta el momento de su verificación y declaración en el procedimiento judicial respectivo. En resumen, esos actos, contratos o negocios únicamente tienen una apariencia de legalidad y no pueden producir efectos jurídicos a favor de las personas que han actuado ilícita o delictivamente; jurídicamente no han adquirido derechos sobre ese tipo de bienes.

En segundo término, como principio de todo Estado democrático, el transcurso del tiempo o cualquier otra circunstancia no podrían hacer cesar los efectos de la nulidad ni tener por consecuencia la posibilidad de revalidar, rehabilitar o convalidar esos actos, negocios o contratos nulos ni permitir la adquisición de derecho alguno. Este principio fundamental se

<sup>9</sup> Más concretamente, la Corte de Constitucionalidad se pronunció literalmente de esta manera: *La norma constitucional 213 regula que son fondos privativos del Organismo Judicial los derivados de la administración de justicia, sin expresión concreta de qué es lo que deba entenderse o qué constituya el "fondo derivado de la administración de justicia", dejando así a la ley la tarea de determinarlos.*



## *Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

encuentra plasmado en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial que dice: "Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención." Asimismo que, "Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude a la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir." Debe considerarse entonces que los actos, contratos o negocios ilícitos, delictivos o en fraude a la ley, no han producido derecho alguno. Sencillamente no puede afirmarse la existencia de derechos adquiridos.

Dentro de este orden de ideas, tiene importancia relevante la sentencia de la Corte de Constitucionalidad<sup>10</sup> en materia de irretroactividad de la ley cuando estipula que: "Los actos y las normas que tienen su origen en decisiones de los poderes legítimos tienen una presunción de legitimidad, lo que trae como consecuencia el considerar como excepcional la posibilidad de invalidarlos; situación que especialmente se manifiesta cuando se trata del órgano legislativo, que no sólo representa directamente la voluntad popular, sino que, además, dispone de distintas alternativas a la hora de legislar, siempre dentro del marco fijado por el constituyente."<sup>11</sup>

El artículo 15 de la Constitución Política dice que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. En armonía con esa disposición, el artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial dice: "La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos". No existe en el ordenamiento jurídico guatemalteco ningún precepto que defina o determine cuándo una ley deba calificarse de retroactiva; sin embargo, la última norma transcrita hace referencia a los derechos adquiridos, que es uno de los conceptos que sirve de fundamento a ciertas corrientes doctrinarias para explicar los alcances del principio de la no retroactividad de la ley. La legislación guatemalteca, puede afirmarse, ha optado -entre las diversas teorías- por la de los derechos adquiridos, la que tiene, como todas las demás sobre esta materia, una conceptualización todavía imprecisa. Para que una ley sea retroactiva, es indispensable que obre sobre el pasado y que lesione derechos plenamente adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, para modificarlos. El derecho adquirido existe cuando se consolida una facultad, un beneficio o una relación en el ámbito de la esfera jurídica de una persona; por el contrario, la expectativa de derecho es la esperanza o pretensión de que se consoliden tales

<sup>10</sup> Corte de Constitucionalidad, Expediente 364-90, Sentencia del 27 de junio de 1991

<sup>11</sup> CONSIDERANDO I de la Sentencia anterior.



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

*facultades, beneficios o relaciones; en tal caso, el derecho existe potencialmente, pero no ha creado una situación jurídica concreta, no se ha incorporado en el ámbito de los derechos del sujeto. Por esto, el principio de irretroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos plenamente, a las situaciones agotadas o a las relaciones jurídicas consagradas; y no a las simples expectativas de derechos ni a los pendientes o futuros. Como ha asentado el Tribunal Constitucional de España: "La potestad legislativa no puede permanecer inerte ni inactiva ante la realidad social y las transformaciones que la misma impone, so pena de consagrar la congelación del ordenamiento jurídico o la prohibición de modificarlo. Obvio es que al hacerlo ha de incidir, por fuerza, en las relaciones o situaciones jurídicas preexistentes, mas sólo se incidiría en inconstitucionalidad si aquellas modificaciones del ordenamiento jurídico incurrieran en arbitrariedad o en cualquier otra vulneración de la norma suprema... la invocación del principio de irretroactividad no puede presentarse como una defensa de una inadmisibles petrificación del ordenamiento jurídico... Lo que prohíbe el artículo...es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad"*<sup>12</sup>

Vale igualmente decir que la presunción del artículo 6 de esta ley, tiene igualmente congruencia con las literales d), e), f), k), l) y m) del artículo 36 de la Ley del Organismo Judicial.<sup>13</sup>

Debe subrayarse consecuentemente que es el estado permanente de nulidad desde el nacimiento del acto, negocio o contrato que permite establecer y verificar la presunción legal referida, aunque como en toda presunción legal, todo interesado podrá, en los

<sup>12</sup> CONSIDERANDO IV de la sentencia anterior mencionada.

<sup>13</sup> **Artículo 36. Ámbito temporal de validez de la ley.** Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes:..... d) Si una nueva ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a todas las personas que comprende. e) Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas y en lo referente a su extinción prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. f) La posición jurídica constituida bajo una ley anterior, se conserva bajo el imperio de otra posterior..... k) En todo acto o contrato, se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, exceptuándose las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren de ellos. l) Los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley, podrán probarse bajo el imperio de otra por los medios que aquella establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere. m) Las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en que deben empezar a regir, pero los plazos que hubiesen empezado a correr y las diligencias que ya estuviesen iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.





## *Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

momentos procesales oportunos, demostrar el origen lícito del bien sometido a la acción de extinción de dominio.

Al establecerse en los artículos 5 y 7 la naturaleza y la autonomía de la acción de extinción de dominio, los derechos relativos al patrimonio acumulado ilícita y delictivamente serán examinados conforme a la materia jurídica que le son propios y se resuelven problemas derivados de la aplicación del Derecho Penal respecto a la pena principal o accesoria del comiso, pues lo hacen depender de la culpabilidad penal del delincuente y del delito mismo, lo que evidentemente tiene un carácter punitivo y personal. Mientras que al considerar el tratamiento de esos bienes dentro de su verdadera naturaleza -de los derechos reales- se coloca a las partes en condiciones de plena igualdad procesal y de carga probatoria, y en cuanto a la valoración de los hechos y de la prueba la decisión se regirá por el principio de preponderancia de la prueba o de la balanza de probabilidades, toda vez que dentro de la sentencia respectiva no se resolverá ningún tema relacionado a la responsabilidad penal de los interesados ni se impondrá pena alguna, lo que permitirá una solución más adecuada del conflicto. Aplicarán todos los principios del Debido Proceso y de la Debida Defensa, no así los principios fundamentales del Derecho Penal y el Proceso Penal.

En los Capítulos III, IV y V se establecen las normas procesales que tienen por finalidad establecer las competencias de las autoridades y funcionarios correspondientes, así como resolver, en el corto plazo, un problema que otra manera se prolongaría en el tiempo como sucede actualmente con el Comiso, evitando cualquier medida o incidente dilatorio, pues éstos se sustanciarán y resolverán en las audiencias de fondo y en la sentencia. No obstante, se introducen normas que tendrán por efecto garantizar el ejercicio adecuado de los derechos de los interesados, principalmente los del debido proceso y la debida defensa. Se regula igualmente la debida administración de los bienes extinguidos en incluso su disposición anticipada a los efectos de evitar su deterioro o gastos onerosos al Estado para su cuidado y administración.

Las competencias atribuidas por la presente ley al Fiscal General y a los juzgados penales, se explica y justifica, primeramente, por la complejidad de los asuntos y materias jurídicas que se relacionan con la forma de adquisición/circulación de los bienes y la extinción de dominio, que se dan dentro de un contexto ilícito o criminal, y, segundo, por la especialización que requiere el tipo de investigación que debe realizarse en esta materia, el análisis fáctico y probatorio de los asuntos que serán tratados en el procedimiento de extinción de dominio.



*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

En cuanto a las medidas de protección especial para testigos e investigadores se explican por sí mismas, dados los riesgos propios del medio en que deberán realizarse tanto en las investigaciones y el procedimiento, como de corrupción. En lo que respecta la delegación que el Procurador General de la Nación podrá otorgar al Fiscal General de la República o al Agente Fiscal designado, debe señalarse que ésta se encuentra en congruencia con los artículos 54 y 252<sup>14</sup> de la Constitución de la República de Guatemala, con el artículo 2 literal a) del Decreto 512 del Congreso de la República -reformado por el Decreto 55-2000 también del Congreso de la República- y con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 24 de enero del 2001, dentro del expediente número 933-2000.

Vale señalar que la retribución a particulares que contribuyan eficazmente en la obtención de prueba o información que hagan eficaz la extinción de dominio, se estatuye con la finalidad incentivar a los ciudadanos para que colaboren con el Estado en el cumplimiento de sus fines sociales y de garante de los derechos y libertades fundamentales.

En estos capítulos también se regula el uso y destino que judicialmente deberán declararse en la resolución definitiva, así como lo relativo a su administración y la designación de las entidades que pueden beneficiarse con estos recursos, los porcentajes que corresponde a cada una y al tipo de actividades que dichos recursos deben destinarse, con la finalidad exclusiva de que sirvan al financiamiento de las autoridades y unidades que se dedican a la prevención y persecución de la delincuencia y la ejecución de la ley de extinción de dominio.

El artículo 22 posibilita la venta anticipada de bienes sometidos a la acción de extinción de dominio, con lo que se pretende evitar el deterioro o pérdida de bienes como está sucediendo en la actualidad y que al final de los procesos pierden cualquier posibilidad de utilización, o que por sus características ocasionen al Estado gastos onerosos para su administración y conservación. Con esta posibilidad se evitará igualmente la afectación de derechos de personas interesadas en virtud de esa pérdida o deterioro por el tiempo que duran los procesos penales.

Dentro del articulado que regula la disposición de los bienes, destaca de manera especial el artículo 33 que tiene como finalidad garantizar la protección constitucional de los bienes

<sup>14</sup> Este artículo estipula en la parte conducente de su párrafo tercero que: *La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados en la ley...*



## *Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

que se encuentren en tierras comunitarias de los pueblos indígenas, al estipular que los bienes de los que trata la presente ley pasarán a formar parte del patrimonio comunitario, respetando la voluntad de sus habitantes y de sus autoridades legítimas a través de las consultas pertinentes.

El Capítulo V desarrolla una de las materias más importantes de la ley: una serie de normas que permitan la plena y adecuada Administración, uso y destino de los bienes sujetos a la acción de extinción de dominio, así como la creación de los entes públicos que deben encargarse con exclusividad de dicha administración, el Consejo Nacional de Administración de bienes y la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, así como su forma de organización e integración, su competencia y funciones, y las formas de control y fiscalización de dicha administración.

En el Capítulo VI se incluyen todas las disposiciones que permiten las reformas o derogatorias de las normas del Código Penal u otras leyes para evitar la ambigüedad y contradicción tanto en la interpretación como en la aplicación de la presente ley; también se reforman algunos artículos de leyes especiales con la finalidad de incluir los fines y la filosofía sobre la cual se crea la ley de extinción de dominio.

En este Capítulo, cabe destacar que varias de las reformas a las leyes penales respecto al comiso, tienden a dar prioridad a la extinción del dominio de los bienes, quedando tal medida o pena únicamente en caso de que la extinción de dominio no sea declarada judicialmente por el juez o tribunal competente.

Así también, en este Capítulo final se reforman normas legales vigentes que han sido mal utilizadas para el encubrimiento de actividades ilícitas, desfigurando totalmente su letra y espíritu original. Asimismo, estas reformas harán cumplir al Estado de Guatemala con compromisos adquiridos con la comunidad internacional, en el marco de los procesos de globalización económica y transparencia financiera.

### **III. OPINION DE LA COMISION:**

Sobre la base de lo expuesto anteriormente, leyes citadas y lo que para el efecto establece el artículo 239 inciso d) de la Constitución Política de la República de Guatemala, 39, 40, 41 y 111 de la Ley del Organismo Legislativo, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emite **DICTAMEN FAVORABLE** relacionado con la



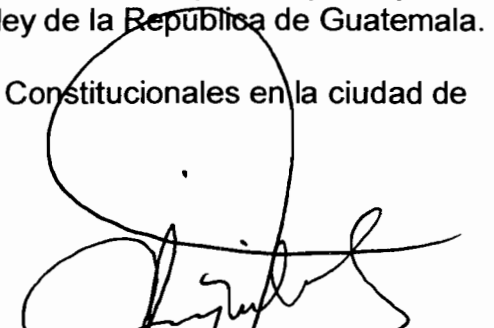
*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

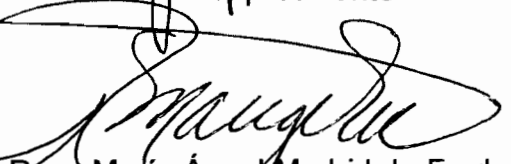
Iniciativa de Ley número de registro **4021, Ley de Extinción de Dominio**, la cual se somete a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República para que, de merecer su aprobación, dicha iniciativa se convierta en ley de la República de Guatemala.

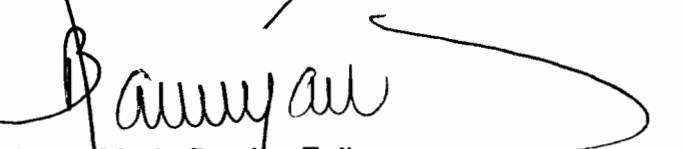
Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la ciudad de Guatemala el veinte de abril de dos mil diez.

  
Oliverio García Rodas  
Presidente

  
Rodolfo Anibal García Hernández  
Vicepresidente

  
José Alberto Gándara Torrebiarte  
Secretario

  
Rosa María Ángel Madrid de Frade  
4.


  
Jorge Mario Barrios Falla

Alicia Dolores Beltrán López

  
Francisco José Contreras Contreras

  
César Augusto Del Águila López

  
Gladys Anabella De León Ruiz

  
Ronnie Danilo Escobar



-000033-

*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales  
Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*



Carlos Valentín Gramajo Maldonado

Oscar Valentín Leal

Carlos Enrique López Girón



Otilia Lux de Cotti



Héctor Alfredo Nula Ericastilla



Roderico Martínez Escobedo



Mariano Rayo Muñoz

Humberto Leonel Sosa Mendoza

**DECRETO NÚMERO \_\_\_\_\_-2010**

**CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

**CONSIDERANDO**

Que, en los últimos años, se ha incrementado de manera alarmante el número de delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y de los particulares, así como los que ocasionan grave daño a la vida, la integridad, la libertad y la salud de los habitantes de Guatemala, relacionados a la delincuencia organizada, así como otras formas de actividades ilícitas o delictivas.

**CONSIDERANDO**

Que mediante actos de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos, cada vez más personas individuales y jurídicas, han acumulado bienes con recursos provenientes de actividades ilícitas o delictivas.

**CONSIDERANDO**

Que los responsables de los delitos económicos, de las infracciones de narcotráfico o de la delincuencia organizada han utilizado diversos mecanismos ilegales mezclados éstos con medios legales para la transferencia y circulación de bienes, ganancias, frutos y productos de la criminalidad, así como para el encubrimiento o el ocultamiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o la propiedad real de esos bienes, ganancias o derechos, a sabiendas de que proceden de actividades ilícitas o delictivas.

**CONSIDERANDO**

Que es imperativo emitir una legislación apropiada para recuperar, a favor del Estado, sin condena penal previa, los bienes, las ganancias, productos y frutos generados por las actividades ilícitas o delictivas.



## CONSIDERANDO

Que es imprescindible establecer un procedimiento específico y exclusivo, fuera de la jurisdicción penal y civil y otorgar a los operadores de justicia instrumentos legales para extinguir los derechos sobre bienes obtenidos o que se deriven de actividades ilícitas o delictivas

## POR TANTO

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República,

## DECRETA

La siguiente:

### LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

#### CAPITULO I

#### DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

**Artículo 1. Objeto de la Ley.** Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social.

Esta ley tiene por objeto regular:

- a) la identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos, así como de las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva, a favor del Estado;
- b) el procedimiento exclusivo para el cumplimiento efectivo de la presente ley;

- c) la competencia y facultades de las autoridades respectivas para la ejecución de la presente ley;
- d) las obligaciones de las personas individuales o jurídicas que se dedican al ejercicio de una profesión o actividades susceptibles de ser utilizadas para la transferencia, uso, ocultamiento y circulación de los bienes producto de actividades ilícitas o delictivas;
- e) los medios legales que permiten la intervención de las personas que se consideren afectadas por la aplicación de la presente ley.

**Artículo 2. Definiciones.** Para la aplicación de la presente ley, regirán las definiciones siguientes:

- a) **Actividades ilícitas o delictivas:** Son todos aquellos hechos punibles contemplados en el Código Penal y leyes penales especiales, así como toda actividad que no siendo delito o falta, produzca un incremento patrimonial injustificado de cualquier persona individual o jurídica.
- b) **Bienes:** Son todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica, sean estos muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, acciones, títulos y valores, cualquier derecho real, principal o accesorio. Igualmente lo serán todos los frutos, ganancias, productos, rendimientos o permutas de estos bienes.
- c) **Bienes Abandonados:** Son todos aquellos bienes así declarados conforme a la presente Ley.
- d) **Extinción de Dominio:** Es la pérdida a favor del Estado, de cualquier derecho sobre los bienes mencionados en la literal b) del presente artículo, y que se encuentren dentro de las causales estipuladas dentro de la presente ley, cualquiera que sea su naturaleza y clase, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular o cualquier persona que se ostente o comporte como tal.
- e) **Fondos Derivados de la Administración de Justicia:** La extinción de dominio declarada por los tribunales competentes no será considerada como pena y los bienes extinguidos no serán considerados Fondos Derivados de la Administración de Justicia y se destinarán de conformidad con lo previsto en la presente ley. En cualquier



circunstancia serán considerados fondos derivados u originados de las actividades ilícitas o delictivas o de los actos, conductas, negocios o contratos de los cuales provienen o les dieron origen y sometidos a la presente ley.

Para la declaración de la extinción de dominio y la interpretación de las normas previstas se tendrán en cuenta los principios establecidos en la presente ley.

**Artículo 3. Principios.** Para la observancia y aplicación de la presente ley, regirán los principios siguientes:

- a) **Nulidad Ab Initio:** Se entenderá que la adquisición o disposición de los bienes o la constitución de patrimonio de origen ilícito o delictivo, constituye negocio jurídico contrario al orden público y a las leyes prohibitivas expresas o se han constituido en fraude a la ley. Los actos y contratos que versen sobre dichos negocios, en ningún caso constituyen justo título y son nulos ab-initio.
- b) **Prevalencia.** Las disposiciones contenidas en la presente Ley, se aplicarán y se interpretarán de preferencia sobre las contenidas en cualquiera otra Ley.

**Artículo 4. Causales de Procedencia de la Extinción de Dominio:** Son causales de acción de extinción de dominio, las siguientes:

- a) Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita o delictiva realizada en territorio nacional o en el extranjero.
- b) Cuando exista incremento patrimonial injustificado de los empleados, servidores o funcionarios públicos y de toda persona individual o jurídica o de las personas que, a sabiendas o debiendo presumir razonablemente, hayan podido lucrar o beneficiarse de los frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de actividades ilícitas o delictivas, en cualquier tiempo, sin que se demuestre suficiente y fehacientemente el origen lícito del mismo.
- c) Cuando los bienes o negocios de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas o delictivas, correspondan al objeto del delito o que se pueda demostrar preponderantemente que vayan a ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo.



- d) Cuando los bienes, frutos, productos o ganancias de que se trate, provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas o delictivas.
- e) Cuando los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate hubieren sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destino ilícito, no hayan sido objeto de investigación o habiéndolo sido, no se hubiese tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa.
- f) Cuando en un proceso penal, exista la información suficiente y probable de que los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate provengan de actividades ilícitas o delictivas:
  - f.1) Se haya declarado judicialmente el archivo o la desestimación de la causa, la rebeldía, la extinción de la persecución o de responsabilidad penal, el sobreseimiento, la clausura provisional o el criterio de oportunidad.
  - f.2) No se pueda identificar al sindicado.
  - f.3) El sindicado o procesado, en caso de fuga, se haya sustraído injustificadamente a la persecución penal o a la pena.
- g) Cuando los derechos de que se trate recaigan sobre bienes o negocios de procedencia lícita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar, encubrir, incorporar, o mezclar bienes de procedencia ilícita o delictiva.
- h) Cuando se hayan abandonado los bienes, recursos, elementos y medios de transporte utilizados para la comisión de un hecho delictivo o actividad ilícita.
- i) En los casos de presunción previstos en el artículo 46, Presunción, de la Ley contra la Narcoactividad, Decreto número 48-92 del Congreso de la República y sus reformas.
- j) Cuando se trate de bienes de una sucesión hereditaria, si el causante adquirió dichos bienes por actividades ilícitas o delictivas.

- k) En los casos de omisión o falsedad en la declaración jurada, prevista en el artículo 25, Declaración, de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, Decreto número 67-2001 del Congreso de la República y sus reformas.
- l) Por condena penal dictada en el extranjero por delito de narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada, cuando existan bienes o productos en el territorio nacional y la autoridad judicial competente del país de que se trate no los haya oportunamente reclamado, se declararán a favor del Estado de Guatemala. Procederá la declaración a favor de Estado extranjero cuando así lo pida una autoridad competente de otro país o un Organismo Internacional, conforme al artículo 8 de la presente ley.

En cualquiera de las causales enumeradas en el presente artículo, el afectado estará facultado para ejercer sus derechos, en particular a probar a través de los medios idóneos y suficientes, los fundamentos de su oposición.

## CAPITULO II

### DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

**Artículo 5. Naturaleza de la Acción.** La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional patrimonial, de carácter real y procederá contra quien aparezca como titular de cualquier derecho real, de crédito, principal o accesorio, sobre cualquiera de los bienes descritos en la presente ley, o contra quien esté ejerciendo la posesión sobre los mismos; o quien se ostente, se comporte o se diga propietario, a cualquier título, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, exentos de culpa o simulación.

La extinción del derecho de dominio se ejercerá y sustanciará exclusivamente por las normas contenidas en la presente ley, independientemente de la acción y procedimientos penales que se hubieren iniciado o terminado de conformidad con las leyes penales de la República de Guatemala.

Para investigar, accionar y decidir sobre la demanda, no será necesario el procesamiento penal ni resolución definitiva o previa de los jueces que conozcan el caso penal, ni otro requisito que no se encuentre señalado en la presente ley.

*[Handwritten signature]*

**Artículo 6. Presunción Legal.** Para los efectos de la presente ley, se presume, salvo prueba en contrario, que los bienes, dinero, productos, frutos o ganancias que hayan sido adquiridos o negociados, en cualquier tiempo, y que estén sometidos o puedan estar sometidos a la acción de extinción de dominio, provienen de las actividades ilícitas o delictivas de que se trate.

**Artículo 7. De la autonomía de la acción.** La acción de extinción de dominio prevista en la presente ley es imprescriptible, distinta e independiente de la persecución y responsabilidad penal.

La muerte del titular del derecho o de la persona que se haya beneficiado o lucrado con bienes, frutos, ganancias o productos mencionados en la presente ley, no extinguirá el ejercicio de la acción, ni la hace cesar, suspender o interrumpir.

**Artículo 8. Asistencia y Cooperación Internacional.** Los convenios y tratados internacionales de cooperación y asistencia legal o judicial para la colaboración recíproca en materia de localización, identificación, recuperación, repatriación y extinción del dominio de bienes, suscritos, aprobados y ratificados conforme a la Constitución Política la República de Guatemala, son plenamente aplicables a los casos previstos en la presente ley, a través de los procedimientos establecidos en los Convenios de Asistencia Legal Mutua.

No obstante el párrafo que antecede, el Fiscal General, directamente o a través de los Agentes Fiscales designados, podrá requerir y obtener en forma directa, información de las autoridades del Estado, Territorio o Jurisdicción en donde se ubiquen o sospeche se encuentran los bienes susceptibles de la acción de extinción de dominio, o bien, podrán trasladarse al lugar en el extranjero para realizar las investigaciones correspondientes. La información o documentos obtenidos podrán presentarse ante el Juez o Tribunal que conozca del caso en Guatemala y tendrán valor probatorio.

### CAPITULO III

#### DEL DEBIDO PROCESO Y DE LAS GARANTÍAS



**Artículo 9. Debido Proceso.** En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el debido proceso y el derecho de defensa, permitiendo a la persona que pudiera resultar afectada, presentar pruebas e intervenir en su práctica, oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes, conforme a las normas de la presente ley.

**Artículo 10. De la Protección de Derechos.** Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de los que pudieren resultar afectados, y en particular los siguientes:

1. Probar el origen lícito de su patrimonio o de los bienes cuya ilicitud se discuten.
2. Probar que los bienes de que se trate no se encuentran en las causales de acción de extinción de dominio contenidas en la presente ley.
3. Demostrar que, respecto de su patrimonio o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la acción, se ha dictado sentencia favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa o fundamento del proceso.

— La decisión de sobreseimiento o la sentencia en proceso penal no causan cosa juzgada en el proceso de extinción de dominio, ni suspende la acción, el procedimiento o la resolución definitiva.

Para los efectos de los numerales que anteceden en el presente artículo, no se admitirá declaración jurada para acreditar la propiedad.

**Artículo 11. Comparecencia.** Quienes con ocasión de la acción de extinción de dominio ejerciten sus derechos, deberán comparecer en forma personal ante la autoridad que esté conociendo la acción, bajo pena de declararse su rebeldía y el abandono, con las consecuencias jurídicas que en tal virtud procedan.

La comparecencia personal no podrá ser suplida a través de apoderados o mandatarios especiales, generales, judiciales o extrajudiciales, sino por circunstancia de impedimento excepcional y justificado, que a juicio del juez competente hagan imposible su comparecencia personal. Por los menores de edad o incapacitados legalmente declarados, comparecerá su representante legal.

## CAPITULO IV

### DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO

**Artículo 11. De la Competencia.** El Fiscal General, directamente o a través de los Agentes Fiscales designados, es el responsable de realizar la investigación correspondiente, de iniciar y promover la acción de extinción de dominio. De acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales podrá conformar unidades especiales para la investigación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio o atribuirla a cualquiera de las secciones existentes. De igual manera, el Ministro de Gobernación conformará las unidades especiales de la Policía Nacional Civil que cooperarán y coordinarán en la investigación con el Ministerio Público.

Sin importar la cuantía del asunto, corresponde a los Tribunales competentes en procesos de Mayor Riesgo, tramitar y proferir la resolución que declare la extinción de dominio.

Los actos y diligencias judiciales realizados o autorizados con anterioridad por los Jueces de Paz, de Primera Instancia municipales o departamentales conservarán su plena validez, siempre que no sean contrarios a las disposiciones de la presente ley.

**Artículo 12. Del inicio de la acción.** La acción de extinción de dominio se iniciará y ejercerá de oficio por el Fiscal General o el Agente Fiscal designado, cuando concurra cualquiera de las causales contenidas en el artículo 4 de la presente ley, ante los Tribunales Competentes para procesos de mayor riesgo.

**Artículo 13. Omisión o falsedad.** Con excepción al procedimiento estipulado en el artículo 24 de la presente ley, en los casos de omisión o de falsedad en la declaración jurada prevista en el artículo 25, Declaración, de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos, Decreto 67-2001 del Congreso de la República, el Ministerio Público iniciará la acción de extinción de dominio sin más trámite y el juez competente emitirá la resolución sobre la procedencia o no de la pérdida definitiva a favor del Estado del dinero o documentos incautados, luego de haber dado la oportunidad en un plazo de ocho (8) días contados a partir de la incautación a toda persona que reivindique un derecho sobre ese dinero o documentos para demostrar su procedencia lícita.

Cuando dicha procedencia lícita no se demuestre o que la persona interesada no haya comparecido en ese plazo, el juez dictará la sentencia correspondiente y declarará la

extinción de dominio sin más trámite. Contra dicha sentencia sólo procederá el recurso de apelación regulado en el artículo 24 de la presente ley.

En caso no proceda la declaratoria de extinción de dominio, en un plazo no mayor de tres (3) días de dictada la resolución y sin previa notificación, el juez, bajo su estricta responsabilidad, certificará lo conducente a la Superintendencia de Administración Tributaria para los efectos impositivos legales que haya lugar.

En ningún caso, la acción de extinción de dominio impedirá la investigación por el delito de Lavado de dinero u otros activos o de cualquier otro delito.

**Artículo 14. Cooperación Interinstitucional.** La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, por su especialidad en la prevención del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, deberá comunicar por los medios que estime pertinentes a la Fiscalía competente del Ministerio Público, aquellas actividades susceptibles de ser utilizadas para lavar dinero o financiar terrorismo de acuerdo a los informes que emitan órganos internacionales de la materia. De igual manera, deberá informar de manera amplia y fundamentada al Ministerio Público cuando en el curso de sus actividades y funciones legales, tenga sospechas razonable de transacciones financieras que den lugar a iniciar una investigación penal por parte de éste y de ser procedente inicie proceso de acción de extinción de dominio y, a la vez, coadyuvar en la investigación correspondiente.

**Artículo 15. Investigación.** Corresponde al Fiscal General o el Agente Fiscal designado conocer de la acción de extinción de dominio, para cuyos efectos iniciará la investigación de oficio o por información que le haya sido suministrada por denuncia o cualquier otra vía fehaciente, con el fin de identificar, localizar, recuperar o, en su caso, repatriar los bienes sobre los cuales podría iniciarse la acción conforme a las causales establecidas en el artículo 4 de la presente ley. La etapa de investigación no podrá exceder de seis (6) meses contados a partir del conocimiento de las causales, y podrá ser ampliada excepcionalmente y por causas justificadas por dos periodos más, con autorización expresa del Fiscal General.

Con la finalidad de demostrar los hechos y circunstancias que correspondan al ejercicio de la acción de extinción de dominio, el Fiscal General o el Agente Fiscal designado podrán recurrir a cualquier medio o método de investigación útil y pertinente siempre que

no supriman los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República de Guatemala y auxiliarse de los miembros del Ministerio Público y Policía Nacional Civil.

Para los fines de la presente ley, los jueces competentes apoyarán las actividades de investigación del Ministerio Público cuando éste lo solicite, o cuando sea necesaria la autorización judicial.

**Artículo 16. Deber de Colaboración.** En el desarrollo de la fase de investigación y en cualquier otra etapa, bajo advertencia expresa de procesamiento y sanción por el delito de obstrucción a la justicia, todo empleado, servidor o funcionario público y las personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, están obligados a proporcionar en el acto la información o los documentos requeridos por el Fiscal General o el Agente Fiscal designado, sin necesidad de orden judicial previa, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia conforme a la ley.

Las personas a que se hace referencia en el párrafo anterior, deberán proporcionar toda la documentación e información que se encuentre en su poder o señalar el lugar en donde pueda encontrarse, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas en las que pudieren incurrir.

Cuando los obligados a proporcionar la documentación o información no pudieren hacerlo justificadamente dentro del plazo estipulado por el Ministerio Público, podrán solicitar una prórroga de cuarenta y ocho (48) horas más, con la debida anticipación, explicando los motivos. Esta prórroga deberá resolverse antes de que concluya el plazo señalado originalmente.

**Artículo 17. Trámite de los asuntos de seguridad nacional.** En caso se invoque el secreto militar o diplomático de seguridad nacional o la confidencialidad de la información, ésta no podrá ser denegada por la autoridad correspondiente y se entregará al Fiscal General o al Agente Fiscal designado, quien procederá a su debido embalaje, y, bajo su custodia será presentada inmediata y directamente al juez competente para que proceda a su examen y valoración del mismo modo en que se estipula en el artículo 244, Documentos y elementos de convicción, del Código Procesal Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la República. Dicho examen se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción en la sede del tribunal.





El empleado, funcionario o servidor público que invoque falsa o maliciosamente la confidencialidad de la información o el secreto militar o diplomático de seguridad nacional, o con fines dilatorios, será procesado y sancionado por el delito de obstrucción a la justicia.

**Artículo 18. Otras obligaciones.** Las personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, mencionadas en el artículo 16 de la presente ley, están obligadas a transmitir toda información relativa a la identidad, residencia y negocios de las personas con las que realicen negocios o contratos de bienes o servicios profesionales, incluyendo copia de sus documentos de identidad personal con fotografía, los cuales deberán ser de clara lectura y visibilidad.

Para la aplicación de la presente ley, todas las personas a las que se refieren los artículos 16 y 19 de la presente ley y las autoridades que por cualquier medio conozcan del asunto, quedan sujetas tanto a la reserva como a la exención de responsabilidad previstas en los artículos 28, Obligación de Informar, y 31, Procedimiento y sanciones, de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos, Decreto 67-2001 del Congreso de la República.

En el reglamento de la presente ley se desarrollará el contenido del presente artículo.

**Artículo 19. Retribución para Particulares.** Las personas individuales o jurídicas que en forma eficaz contribuyan a la obtención de evidencias para la declaratoria de extinción de dominio, o las aporte, recibirán una retribución de hasta el cinco por ciento (5%) de los bienes declarados en extinción de dominio.

En el caso de bienes inmuebles, dicha retribución será sobre el valor catastral registrado en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas.

En el caso de bienes muebles y demás bienes, dicha retribución, se hará de conformidad con la tasación que realizará la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción del Dominio, de acuerdo a su reglamento.

La retribución a la que se refiere el presente artículo no será aplicable a empleados, servidores o funcionarios públicos en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, ni a aquellas personas que hayan sido declaradas colaboradores eficaces con la justicia o se les haya otorgado el criterio de oportunidad.



En todos los casos, el Ministerio Público solicitará al Juez que el reconocimiento de la retribución se declare en la resolución, para que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes proceda a la remuneración con los fondos privativos contenidos en el presupuesto de la institución.

**Artículo 20. Acceso a la información oficial.** La Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil General de la República, el Registro de la Propiedad Intelectual, el Registro de Garantías Mobiliarias, las Municipalidades y cualquier otra entidad pública, deberán prestar su colaboración inmediata y de manera gratuita al Ministerio Público cuando le sean requeridos informes para la investigación de la materia regulada en la presente ley, sin necesidad de orden judicial. Para dichos efectos, las instituciones enumeradas podrán celebrar convenios con el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para la colaboración y asistencia en la investigación, así como para el acceso directo en forma inmediata o automática a la información que posean en virtud de sus atribuciones legales, cualquiera que sea su soporte.

**Artículo 21. Medidas cautelares.** Durante la fase de investigación, a solicitud del Fiscal General o del Agente Fiscal designado, el juez competente decretará sobre los bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio, cuando se den las condiciones necesarias, las medidas cautelares pertinentes, que comprenderán: la suspensión de los derechos de propiedad o accesorios, cualquiera que sea su forma; la anotación de la acción de extinción de dominio, el embargo, la intervención, inmovilización o secuestro de los bienes, de fondos depositados en cuentas o cajas de seguridad del sistema bancario o financiero y de los que se llegaren a depositar posteriormente, de títulos de valores y de sus rendimientos, o emitir la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su secuestro o incautación, así como cualquier otra medida cautelar que se considere pertinente.

El Fiscal General o el Agente Fiscal designado velará porque las medidas cautelares decretadas por el juez sean comunicadas inmediatamente a quien corresponda y de que las anotaciones respectivas se han efectivamente cumplido en los registros, archivos, entidades o instituciones públicas y privadas correspondientes. Cualquier incumplimiento, retraso o inobservancia de las órdenes judiciales serán sancionadas conforme a las leyes penales especiales y a los reglamentos administrativos y disciplinarios.



En casos de urgencia, las medidas cautelares podrán ser ordenadas por el Fiscal General o el Agente Fiscal designado, quien procederá a informar al juez dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, para que éste las confirme o las anule en caso fueren jurídicamente improcedentes sobre la base de la información proporcionada por el Agente Fiscal designado y las normas de la presente ley. El juez resolverá en la misma audiencia con notificación personal e inmediata al Agente Fiscal designado, entregándole cuando éste lo requiera el oficio o la comunicación correspondiente con la finalidad de realizar directamente los avisos a quien corresponda.

Contra las resoluciones que ordenen medidas cautelares no cabe recurso alguno. Las apelaciones contra las resoluciones que rechacen las medidas cautelares serán interpuestas directamente ante la Sala de Apelaciones en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas y deberán ser examinadas y resueltas en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas.

Las medidas cautelares, no podrán ser levantadas mientras se tramite el recurso de apelación que se haya interpuesto en contra de la resolución definitiva de la acción de extinción de dominio.

**Artículo 22. De la venta anticipada de bienes.** A solicitud del Ministerio Público, el juez autorizará la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irroque perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración. Lo mismo procederá cuando se trate de semovientes u otros animales.

Los bienes fungibles o perecederos que se encuentren en buen estado y que puedan perderse o sufrir deterioro con el curso del tiempo, serán enajenados al mejor postor, o en condiciones de mercado cuando fuere el caso, por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, sin necesidad de autorización judicial previa. Una vez realizada la enajenación se comunicará a la autoridad judicial competente lo actuado para que conste en el expediente judicial. En este caso, si no fuera posible su venta, los productos podrán ser donados a instituciones públicas de beneficencia.

En todos los casos, el producto de la venta o la subasta de los bienes será depositado en una cuenta específica y estos fondos estarán a la espera de que el órgano jurisdiccional competente, resuelva lo que corresponda en materia de extinción de dominio.

**Artículo 23. Protección de identidad de agentes de policía y testigos.** Durante la fase de investigación y todo el procedimiento, los testigos particulares, así como los agentes de la Policía Nacional Civil que participen como investigadores o en métodos especiales de investigación, o comparezcan como testigos en el ámbito de la presente ley, podrán proteger su identidad con la utilización de códigos alfanuméricos proporcionados por el Fiscal General o el Agente Fiscal designado, quien conservará bajo su estricta responsabilidad la individualización e identidad verdaderas de tales agentes de policía o testigos. Durante el proceso podrán ser interrogados a través de medios que permitan conservar su identidad y garanticen su protección personal.

Para la observancia del presente artículo, se podrá utilizar supletoriamente las disposiciones legales vigentes relativas a colaboración eficaz, testigos protegidos y agentes encubiertos.

**Artículo 24. Del ejercicio de la acción y su procedimiento.** El trámite de la acción de extinción de dominio se cumplirá de conformidad con las reglas siguientes:

1. Concluida la investigación, el Fiscal General requerirá al Procurador General de la Nación la designación y delegación al Agente Fiscal por él propuesto para el ejercicio de la acción de extinción de dominio. El Procurador General de la Nación emitirá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de recibida la solicitud, la resolución necesaria para designar y delegar al Agente Fiscal el ejercicio de la acción en nombre del Estado. Dicha resolución deberá notificarse dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas al Fiscal General y al Agente Fiscal designado.
2. La acción de extinción de dominio se iniciará por el Fiscal General o el Agente Fiscal designado, en un plazo no mayor de dos días ante Juez o Tribunal Competente para Procesos de Mayor Riesgo, exponiendo para esos efectos:
  - a. Los hechos en que fundamenta su petición;
  - b. La descripción e identificación de los bienes que se persiguen, así como la causal en la que se fundamenta la extinción del dominio;
  - c. El nombre, los datos de identificación y la dirección de residencia o de negocios de las personas que podrían tener interés en el asunto, o las razones que imposibilitan la identificación de las mismas;



d. El ofrecimiento de las pruebas conducentes.

3. Dentro de las veinticuatro (24) horas de presentada la petición de extinción de dominio, el juez o tribunal competente que conozca de la misma dictará resolución admitiéndola a trámite y haciendo saber a las personas interesadas o que pudieren resultar afectadas, del derecho que les asiste para comparecer a juicio oral y del apercibimiento en caso de no hacerlo. La resolución será notificada al Fiscal General, al Agente Fiscal designado y al Procurador General de la Nación, el mismo día en que se haya dictado.
4. En caso de error u omisión en la redacción y formalidades en la petición de extinción de dominio, el juez o presidente del tribunal mandará a corregirlos, pero no podrá suspender, interrumpir ni hacer cesar el procedimiento. El Agente Fiscal designado enmendará los errores dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación.
5. Si no se hubiere hecho con anterioridad, el juez o tribunal competente decretará en la misma resolución de admisión a trámite las medidas cautelares necesarias que aseguren la ejecución de la sentencia, las que se ordenarán y ejecutarán antes de ser notificada la resolución a la parte interesada.
6. Dentro de los tres (3) días de dictada la resolución de admisión a trámite, se notificará a las personas interesadas o que pudieran resultar afectadas, en la dirección de residencia o negocio que de ellas se conozca, dejando la cédula de notificación a quien habita la residencia o encargado del negocio, identificándolos plenamente. Dicha Notificación tendrá su valor y efectos legales correspondientes, tal como la notificación personal.
7. Si la notificación no pudiere efectuarse por cualquier razón, el notificador fijará la cédula en la dirección señalada, en lugar visible del inmueble relacionado, razonando en acta tal circunstancia y haciéndola saber inmediatamente al Juez o Tribunal que conozca de la causa quien ordenará, en tal caso, por medio de edicto y de manera sucinta, la información necesaria acerca de la identificación y clase de proceso de que se trate, que identifiquen al expediente relacionado. La publicación se hará en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación del país, por dos veces, dentro de un período que no exceda de cinco (5) días.

*[Handwritten signature]*

8. Dentro de los dos (2) días después de la notificación a la que se hace referencia en los numerales que anteceden, el juez o tribunal emplazará a las partes señalando día y hora para la audiencia que se celebrará en un plazo no mayor de diez días (10) contados a partir de la resolución. A dicha audiencia comparecerán pudiendo manifestar oralmente su oposición o medios de defensa, interponer excepciones y proponer todos medios de prueba. La no comparecencia de una de las partes a la audiencia tendrá como consecuencia la declaratoria de rebeldía, a solicitud del Ministerio Público.
9. La única excepción previa que se podrá interponer es la de falta de personalidad, la cual deberá ser resuelta dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de la audiencia mencionada en el numeral anterior. Contra la resolución que resuelva la excepción se podrá interponer el recurso de apelación, el cual se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto en los numerales 14 y 15 del presente artículo. La apelación no suspenderá el procedimiento de extinción de dominio.
10. Resuelta la excepción previa o celebrada la audiencia prevista en el numeral 8 del presente artículo, según corresponda, el juez o Tribunal abrirá a prueba el proceso por un plazo de treinta (30) días, prorrogable excepcionalmente por el término de la distancia o cuando sin culpa del interesado no haya podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. El ofrecimiento, admisibilidad y diligenciamiento de cada medio de prueba se realizará de conformidad con lo previsto para dicha materia en Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República.
11. En la primera audiencia, el Ministerio Público podrá ampliar su escrito inicial para cuyos efectos se suspenderá la audiencia señalada, pudiendo el juez o tribunal prorrogarla por una sola vez, señalándola nuevamente dentro de un plazo que no exceda de ocho (8) días y las partes quedarán así notificadas.
12. Concluido el periodo de prueba, el Juez o Tribunal señalará día y hora para la vista, la cual será notificada verbalmente el día del último diligenciamiento, misma que deberá celebrarse en un plazo no mayor de diez (10) días. En ella, las partes emitirán sus conclusiones en el siguiente orden: Ministerio Público, Procurador General de la Nación y a las otras partes que intervienen en el proceso.
13. Una vez concluida la vista, el Juez o Tribunal citará directamente a las partes para dictar sentencia dentro de un plazo que no exceda de diez (10) días, en la cual deberá

resolver las excepciones, incidentes, nulidades, la declaración de extinción de dominio y todas las demás cuestiones que deba resolver conforme a la presente ley. La valoración de la prueba se realizará de conformidad con la sana crítica razonada. La sentencia se leerá en la misma audiencia y valdrá notificación para todas las partes.

14. En contra de la resolución o sentencia que declare la extinción de dominio, sólo procede el recurso de apelación, el cual se deberá interponer ante el juez o tribunal que dictó la misma, dentro de los tres (3) días siguientes de notificada, ésta será admitida o rechazada dentro de un plazo de dos (2) días contados a partir de su recepción. De ser admitida, se remitirá a más tardar al día siguiente de la resolución a la Sala respectiva, sin necesidad de notificación. El recurso deberá ser resuelto dentro de los quince (15) días siguientes a aquel en que el expediente llegue a la Sala de Apelaciones.
15. La apelación no suspenderá ninguna de las medidas decretas por el juez o tribunal competente para garantizar la extinción de dominio.
16. La Sala de Apelaciones emplazará a los interesados para que comparezcan a la audiencia oral para que expongan sus argumentos y conclusiones, la cual se fijará dentro del plazo de quince días siguientes a aquel en que el expediente haya llegado a la sala. La resolución se dictará en la misma audiencia conforme a las reglas de la sana crítica razonada. Si por la hora y complejidad del asunto no sea posible dictar sentencia, se señalará nueva audiencia oral que deberá celebrarse a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la primera audiencia, lo cual será informado verbalmente a las partes en la misma audiencia y valdrá notificación para todos. La lectura de la sentencia tendrá lugar de notificación, con los efectos legales pertinentes. Los interesados recibirán en la misma audiencia copia de la sentencia.
17. En la sentencia, la Sala de Apelaciones confirmará, modificará o anulará la resolución de primera instancia; sin embargo, no podrá revisar de nuevo o hacer mérito de las pruebas, ni de los hechos que el juez o tribunal hayan declarado probados.
18. La realización y cumplimiento de todas las notificaciones y publicaciones previstas para el procedimiento, se realizarán bajo la responsabilidad personal del juez del caso o del Presidente del tribunal competente. El oficial notificador dará preferencia a estas notificaciones sobre cualquier otra. La negligencia o inobservancia de los plazos de notificación y publicación serán consideradas falta gravísima y motivo suficiente de

destitución, independientemente de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

19. En la tramitación del recurso de apelación regirán las mismas reglas para la notificación del procedimiento en primera instancia previstas en el presente artículo, cuando sea pertinente.

Contra lo resuelto por la Sala no cabe ningún recurso, ni el de casación.

**Artículo 25. Del abandono de los bienes.** Como excepción al procedimiento previsto en el artículo anterior, el juez o tribunal competente declarará el abandono de los bienes y por consiguiente la extinción de dominio a favor del Estado, ordenando su traslado al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción del Dominio, cuando para los efectos previstos en la presente ley:

1. Se declare la rebeldía por incomparecencia al proceso de extinción de dominio
2. Se declare la rebeldía en un proceso penal por autoridad judicial competente.
3. Hayan transcurrido treinta (30) días de la incautación o secuestro del bien, y no se pueda establecer la identidad del autor o partícipe del hecho delictivo o este haya abandonado los bienes, recursos, elementos y medios de transporte utilizados. En este caso, se procederá con lo señalado en la presente ley en los numerales 6 y 7 del Artículo 24 referente a las notificaciones.

**Artículo 26. Plazos.** Los plazos establecidos para el procedimiento son de obligatorio cumplimiento; su inobservancia por parte de la autoridad correspondiente se considerará falta disciplinaria gravísima, independientemente de cualquier otra responsabilidad que resulte.

**Artículo 27. Devolución de bienes.** En los casos que se investigue o se tramite la acción de extinción de dominio, el Fiscal General, el Agente Fiscal designado, el juez o tribunal competentes, no podrán resolver lo referente a la devolución de bienes hasta que se dicte la resolución o sentencia sobre la acción de extinción de dominio. En todos los casos, se desestimará de plano cualquier petición o incidente que los interesados propongan con esa finalidad.



**Artículo 28. De las Nulidades.** Si los interesados interpusieren nulidad, ésta deberá ser resuelta en la sentencia de Primera o Segunda Instancia, según corresponda.

No se admitirá ninguna nulidad de previo pronunciamiento.

**Artículo 29. Causales de Nulidad.** Las únicas causales de nulidad en el proceso de extinción de dominio, serán las siguientes:

1. Falta de notificación, excepto en los casos de notificación previstos en los el artículo 24 y artículo 25 numeral 3 de la presente ley
2. Negativa injustificada a decretar una prueba conducente o a practicar, sin causa que lo justifique, una prueba oportunamente ofrecida. La nulidad en este caso no procederá si, a pesar del defecto, se concluye que no tendría por efecto la modificación de la parte resolutive.

**Artículo 30. De las excepciones e incidentes.** Durante la etapa de investigación y hasta antes de la primera audiencia del proceso de acción de extinción de dominio, no se podrán interponer excepciones ni incidentes.

**Artículo 31. Acumulación.** Para efectos de la aplicación de la presente ley, en ningún caso podrá pedirse la acumulación de procesos, a menos de que se trate de procesos de extinción de dominio relacionados, ni alegarse cuestión prejudicial, obstáculos, litispendencia o excepciones e incidentes para impedir que se continúe el proceso o se dicte resolución. Lo anterior se resolverá en la sentencia, conforme a la presente ley.

**Artículo 32. De la Sentencia.** Si el juez estimare procedente la acción, la sentencia declarará la extinción de dominio de todos los derechos reales, principales o accesorios y ordenará su transmisión a favor del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.

La sentencia firme que declare la extinción de dominio, además de valer como título legítimo y ejecutivo, tendrá por efecto que los respectivos bienes muebles e inmuebles, dinero, ganancias, frutos y productos financieros se transfieran a favor del Estado a nombre del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y pasen al dominio de éste para que proceda de acuerdo a las disposiciones de la presente

Ley. Por lo anterior, los registros públicos correspondientes están obligados a su inscripción para efectos de oponibilidad frente a terceros.

Si en la resolución se reconocieren los derechos de un acreedor prendario o hipotecario, el Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio procederá a cancelar el crédito, siempre que el bien reporte ganancia económica al Estado después del pago del crédito respectivo.

**Artículo 33. Bienes en tierras comunitarias.** Con la finalidad de hacer eficaz la protección especial constitucional, cuando se trate de bienes inmuebles sobre los cuales recaiga la extinción de dominio y que se encuentran en tierras comunitarias de los pueblos indígenas, el juez o tribunal consultará con las autoridades comunitarias legítimas, dentro de los plazos que determina la presente ley para la incorporación de prueba y conclusiones, sobre la forma en que dichos inmuebles serán trasladados a nombre de la comunidad de que se trate y sobre su regulación conforme a sus propias normas, costumbres, usos y tradiciones; el juez o tribunal competente lo harán constar en el proceso y la sentencia respectiva.

**Artículo 34. Bienes por valor equivalente.** En la misma sentencia, el juez o tribunal competente, hará declaración de extinción de dominio sobre bienes equivalentes del mismo titular cuando en la ejecución no resultare posible identificar, ubicar o extinguir el dominio de los bienes determinados sobre los cuales verse la acción.

Lo dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en perjuicio de terceros de buena fe, exentos de culpa o de simulación.

**Artículo 35. Certificación a la Superintendencia de Administración Tributaria, al Ministerio Público y a las Municipalidades.** En caso se declare la improcedencia de la extinción de dominio, el juez ordenará en la misma resolución que se certifique lo conducente a la Superintendencia de Administración Tributaria, al Ministerio Público y a las Municipalidades para que se inicien de inmediato las investigaciones que a cada institución le corresponda sobre los bienes o el patrimonio para efectos impositivos, pago de multas y acciones penales, civiles y administrativas correspondientes. La certificación de lo conducente se remitirá a dichas instituciones en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas desde la fecha de la resolución.



**Artículo 36. De los gastos procesales y de administración.** Los gastos que se generen con ocasión de la investigación y del trámite de la acción de extinción de dominio, así como los que se presenten por la administración de los bienes en la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, se pagarán a cargo de los rendimientos financieros de los bienes que han ingresado al fondo de dicha institución.

## CAPITULO V

### DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y RECURSOS

**Artículo 37. Creación del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.** Se crea el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio como órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República con personalidad jurídica propia para la realización de su actividad contractual y la administración de sus recursos y patrimonio.

Al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio estará subordinada la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, la cual será un órgano ejecutivo a cargo de un Secretario General y de un Secretario General Adjunto, quienes serán los funcionarios de mayor jerarquía, para efectos de dirección y administración de la Secretaría. Les corresponderá colaborar, apoyar y ejecutar las decisiones que emanen del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y el seguimiento de sus políticas, así como la planificación, organización, el control de la institución y tendrán todas las demás funciones que la presente ley y sus reglamentos estipulen.

El Secretario General y el Secretario General Adjunto serán nombrados por el Vicepresidente de la República, por oposición, apegada en lo conducente a los principios previstos en la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto número 19-2009 del Congreso de la República.

El Secretario General y el Secretario General Adjunto durarán en su cargo por un plazo de tres (3) años, pudiendo ser reelectos por un único período igual.

El Secretario General y el Secretario General Adjunto deberán ser removidos de sus cargos por incumplimiento de alguno o varios de los preceptos contenidos en los artículos



- e) El Ministro de Gobernación.
- f) El Ministro de Defensa Nacional.
- g) El Ministro de Finanzas Públicas
- h) El Secretario Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.

Le corresponderá al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio conocer, aprobar, adjudicar y resolver en definitiva sobre las inversiones que se realizarán sobre el fondo de dineros incautados, así como las contrataciones de arrendamiento, administración o fiducia, enajenación, subasta o donación de bienes extinguidos.

Las decisiones que adopte el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio deberán ser consensuadas por sus integrantes para su aprobación. En el caso de no alcanzar el consenso, las decisiones se tomarán por la mayoría simple de los integrantes.

El Secretario Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Bienes participará en el Consejo Nacional, con voz pero sin voto.

**Artículo 40. Administración de bienes.** Los bienes que representen un interés económico sobre los que se adopten medidas cautelares o precautorias quedarán de inmediato a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, la que procederá a constituir fideicomisos de administración en las entidades bancarias o financieras sujetas a la supervisión por la Superintendencia de Bancos. En su defecto, podrá arrendar o celebrar otros contratos a precio justo con personas individuales o jurídicas con la finalidad de mantener la productividad y valor de los bienes.

Cuando los bienes de que se trate constituyan prueba en el proceso penal, se procederá obligatoria e inmediatamente a la realización de las pruebas anticipadas necesarias. Los bienes se conservarán y custodiarán por el Ministerio Público hasta la realización de las pruebas anticipadas correspondientes. Al concluir el diligenciamiento de la prueba anticipada, el Ministerio Público los trasladará a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio para lo que corresponda de acuerdo a la presente ley.

Los bienes que el Ministerio Público determine, deben conservarse por considerarse que pueden aportar pruebas adicionales en el proceso, no podrán retenerse por un periodo

mayor de dos (2) años, transcurridos los cuales deberán ser transmitidos al Consejo Nacional.

**Artículo 41. De la contratación.** Con el fin de garantizar que los bienes sometidos al proceso de extinción de dominio, sean o continúen siendo productivos y generadores de empleo y evitar que su conservación y custodia genere erogaciones para el presupuesto del Estado, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio podrá celebrar sobre cualquiera de ellos contratos de arrendamiento, comodato, administración o fiduciarios, previa realización de prueba anticipada cuando sea necesaria. Los procedimientos para la selección de los contratistas y para la celebración de los contratos, se regirán por las normas previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República, sin perjuicio de ser supervisadas por el Consejo.

En todo caso, para la selección del contratista, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio deberá publicar como mínimo un aviso de invitación a cotizar, en un diario de amplia circulación nacional, en el Sistema GUATECOMPRAS y en la página electrónica de la entidad, para la presentación de propuestas y decidir sobre su adjudicación en audiencia pública, sobre tres (3) propuestas por lo menos. En el evento, de no presentarse más que un solo oferente y su propuesta resultare elegible, el contrato podrá ser adjudicado, dejando constancia de este hecho en el acta respectiva a la que se adjuntará copia certificada de los avisos y publicaciones realizados.

Para el proceso de selección del contratista como en el de la celebración de los contratos se deberá exigir las garantías a que haya lugar de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de ellos.

La aprobación y adjudicación del contratista estará a cargo del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y regirán los principios de celeridad y urgencia, independientemente de las normas aplicables.

**Artículo 42. Del Fideicomiso.** Cuando fuere posible, con los bienes indicados en la presente ley, se podrán constituir fideicomisos de administración o se darán en arrendamiento, uso, depósito o comodato oneroso para evitar la pérdida de su valor.

En todo caso, la entidad fiduciaria se pagará, con cargo a los bienes administrados o a sus productos, el valor de sus honorarios y de los costos de administración en que

incurra, asegurando que no sean superiores al valor de los bienes o la productividad. Cualquier faltante que se presentare para cubrirlos será exigible con la misma preferencia con que se tratan los gastos de administración en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se liquiden o subasten.

La aprobación de la constitución del fideicomiso estará a cargo del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.

**Artículo 43. Uso provisional de bienes.** La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio podrá autorizar el uso de los bienes que por su naturaleza requieran ser utilizados para evitar su deterioro, previo aseguramiento por el valor del bien para garantizar un posible resarcimiento por deterioro o destrucción, cuando las características y valor del bien así lo ameriten. Los costos de la póliza de aseguramiento serán cubiertos por el Organismo o institución pública solicitante.

El uso provisional de los bienes será exclusivamente autorizado para la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio en y a los Organismos o instituciones públicas que participen o colaboren con la investigación y el proceso de extinción del dominio. El procedimiento de asignación se realizará de acuerdo al reglamento de la institución.

**Artículo 44. Fondo de dineros incautados.** Se faculta a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio a abrir cuentas corrientes en moneda nacional o extranjera en cualquiera de las instituciones bancarias o financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, para que el dinero efectivo incautado, los recursos monetarios o títulos de valores sujetos a medidas cautelares, así como los derivados de la venta de bienes perecederos, animales, semovientes y la enajenación anticipada de bienes, sean transferidos o depositados al fondo de dineros incautados, cuya cuantía formará parte de la masa de sus depósitos y dineros.

Dicho fondo podrá generar rendimientos y el producto de estos deberá ser destinados a:

1. Un cuarenta por ciento (40%) para cubrir gastos operativos de las entidades que participaron en la investigación y el procedimiento de extinción de dominio.
2. Un cuarenta por ciento (40%) para el mantenimiento de los bienes incautados.



3. Un veinte por ciento (20%) para cubrir indemnizaciones por pérdida o destrucción de bienes.

La distribución del dinero para cubrir los gastos operativos entre las entidades se dispondrá reglamentariamente.

En cualquier caso, cuando la autoridad judicial competente ordene la devolución del dinero en efectivo, este deberá incluir los intereses generados cuando la autoridad judicial así lo indique.

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio deberá presentar al menos semestralmente al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, o cuando este lo requiera, así como al Congreso de la República, un informe de los rendimientos generados y su distribución. Todas sus actividades, estarán fiscalizadas por auditorías externas independientes además de la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala.

**Artículo 45. Fondo de dineros extinguidos.** Se faculta a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio a abrir cuentas corrientes en moneda nacional o extranjera en las entidades bancarias o financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos para que sean transferidos o depositados el dinero efectivo, los recursos monetarios o títulos de valores o del producto de las ventas de bienes o servicios cuya extinción de dominio se haya declarado.

**Artículo 46. Destino de los dineros extinguidos.** De acuerdo a lo señalado en el artículo anterior, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio distribuirá los recursos de la manera siguiente:

1. Un veinte por ciento (20%) con destino exclusivo para cubrir los gastos de las unidades de métodos especiales de investigación creadas en virtud de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto número 21-2006 del Congreso de la República; las fuerzas de tarea o unidades encargadas de la interceptación aérea y marítima de drogas.
2. Un dieciocho por ciento (18%) que serán fondos privativos del Ministerio Público y deberán ser invertidos en los programas de protección de testigos, el cumplimiento





de la presente ley y la investigación y juzgamiento de los delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos, Narcoactividad y Delincuencia Organizada.

3. Un dieciocho por ciento (18%) que pasará a formar parte de los fondos privativos del Ministerio de Gobernación para el entrenamiento y adquisición de equipo en apoyo directo a las unidades de investigaciones relacionadas con la presente Ley y para el Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Información Criminal de la Policía Nacional Civil.
4. Un veinte por ciento (20%) que pasará a formar parte de los fondos privativos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, con destino exclusivo para cubrir los gastos de administración de bienes incautados y aquellos extinguidos hasta que proceda con su venta.
5. Un veinte por ciento (20%) para los Fondos Privativos del Organismo Judicial.
6. Un cuatro por ciento (4%) para la Procuraduría General de la Nación.

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio informará al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio sobre lo actuado semestralmente o cuando este lo solicite.

**Artículo 47. De los bienes extinguidos.** Salvo lo dispuesto para las comunidades indígenas y lo dispuesto en el artículo 46 de la presente ley, si en resolución firme, se ordenare la extinción del dominio a favor del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio de los bienes, la Secretaría podrá conservarlos para el cumplimiento de sus objetivos, enajenarlos o subastarlos conforme a la presente ley.

Asimismo podrá donarlos a entidades de interés público, pero prioritariamente a:

1. Las Unidades Especiales del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público cuando se trate de vehículos, equipos y armas que no sean de uso exclusivo del ejército.
2. Al Ministerio de Defensa cuando se trate de bienes, equipos o armas de uso exclusivo del ejército, naves marítimas o aeronaves de ala fija o rotativa, las cuales deben ser utilizadas en apoyo al Ministerio Público, al Ministerio de



1. Sea declarada la extinción del dominio y reconocidos los derechos reales, se procederá a su enajenación o subasta de los bienes y se pagará el crédito. La Secretaría podrá también entregar el bien en dación en pago, cuando lo estime conveniente.
2. El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio estime que conviene a sus intereses, podrá apersonarse como tercero interesado en cualquier etapa en los procesos de ejecución regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, y pagar el monto adeudado a los acreedores, en cuyo caso se subrogará los derechos del acreedor de buena fe.
3. Sea autorizada la subasta, venta o remate anticipado de bienes sujetos a medidas cautelares cuando corran riesgo de perder, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración, previo reconocimiento de los derechos reales y en los términos que el auto indique.

**Artículo 52. Facultad de compartir bienes en operaciones conjuntas.** El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio podrá autorizar compartir los bienes o recursos cuya extinción de dominio fuese declarada con otros Estados en caso de operaciones conjuntas de acuerdo a los principios que rigen la cooperación internacional o acuerdos bilaterales o multilaterales.

## CAPITULO VI

### DE LAS DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS

**Artículo 53. De los procesos en curso.** En los casos penales bajo investigación o procesamiento a la entrada en vigor de la presente ley, donde existan las causales determinadas en el artículo 4 de esta ley, el Ministerio Público iniciará inmediatamente la investigación para el ejercicio de la acción de extinción de dominio.

**Artículo 54. Del Inicio de las actividades del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.** El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio que se crea a través de esta ley, iniciará sus funciones treinta (30) días después de entrar en vigencia la presente.

**Artículo 55. Reglamentos.** Todos los reglamentos deberán ser promulgados en el plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de que el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio inicie sus actividades.

**Artículo 56. De los recursos.** Se establece la obligación del Estado de incluir una asignación de diez millones de quetzales (Q.10,000,000.00) en el Presupuesto General de Egresos del Estado, como fondos privativos, durante tres años a partir de la vigencia de la presente ley, para dar cobertura a los gastos de instalación, organización y operación iniciales del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, en tanto éste logra su autonomía financiera con los fondos provenientes de los recursos derivados de la extinción de dominio, de conformidad con la presente ley.

**Artículo 57. Epígrafes.** Los epígrafes de los artículos de la presente ley no tienen validez interpretativa.

**Artículo 58.** Se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos, Decreto número 67-2001 del Congreso de la República, el cual queda así:

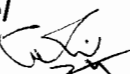
***“Artículo 2 Bis. Autonomía del delito.** El delito de lavado de dinero u otros activos es autónomo, toda vez que para su enjuiciamiento no se requiere probar la existencia del delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos.”*

**Artículo 59.** Se adiciona el artículo 17 Bis a la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos, Decreto número 67-2001 del Congreso de la República, el cual queda así:

***“Artículo 17 Bis. Extinción de dominio.** Los artículos 8, 14, 15, 16 y 17 de la presente ley se aplicarán únicamente cuando en la sentencia se declare por el tribunal competente que no procede la acción de extinción de dominio, en la forma prevista en la ley de la materia, la cual tiene prelación sobre la presente ley.”*

**Artículo 60.** Se reforma el segundo párrafo del artículo 25, Declaración, de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos, Decreto número 67-2001 del Congreso de la República, el cual queda así:

***“Los agentes de Aduanas o de la Policía Nacional Civil podrán verificar por entrevista, la información proporcionada en la declaración jurada contenida en el***



*formulario a que se refiere el párrafo anterior; podrán igualmente registrar el equipaje, los contenedores o envíos de los pasajeros y de las personas jurídicas según corresponda, así como al pasajero mismo.*

*En caso de existir omisión injustificada de la declaración o falsedad en la misma, el dinero o los documentos relacionados serán incautados y puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, contemplada en la ley de la materia. La persona quedará sujeta a proceso penal por los delitos de falsedad ideológica y perjurio, y de darse las condiciones legales, por lavado de dinero u otros activos o encubrimiento, según corresponda."*

**Artículo 61.** Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 18, Comiso, de la Ley contra la Narcoactividad, Decreto número 48-98, y sus reformas del Congreso de la República, los cuales quedan así:

*"Los párrafos del presente artículo que anteceden se aplicarán únicamente cuando en sentencia se declare por el tribunal competente que no procede la extinción de dominio, en la forma prevista en la ley de la materia, la cual tiene prelación sobre el presente artículo."*

**Artículo 62.** Se reforma el párrafo primero del artículo 46, Presunción, de la Ley contra la Narcoactividad, Decreto número 48-92, del Congreso de la República y sus reformas el cual queda de la siguiente manera:

*"Para los efectos de esta ley, se establece la presunción de que el dinero, producto o bienes provienen de transacciones derivadas de los delitos a que se refiere esta ley, cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de siete (7) años anteriores al procesamiento respectivo, dicho plazo, por razones de irretroactividad de la ley comenzará a contarse desde la vigencia de la presente ley."*

**Artículo 63.** Se reforma el artículo 9, literal c), Obstrucción a la Justicia, de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto número 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

*"c) El particular, o quien siendo funcionario, servidor o empleado público participe en la fase de investigación o de los métodos especiales de investigación, la*



*persecución, procesamiento y juzgamiento de los delitos establecidos en la presente ley, que:*

- 1) *Proteja indebidamente o encubra a quién o a quienes aparecen como sindicados de un hecho investigado;*
- 2) *Oculte información o entregue información errónea o falsa que afecte el buen curso de la investigación o el proceso;*
- 3) *Falsifique o altere documentos y medios probatorios, o los destruya;*
- 4) *Actúe con retardo intencional de tal forma que obstaculice la investigación, la persecución penal o el juzgamiento;*
- 5) *Preste falso testimonio a favor del sindicado o del imputado en las causas que se deriven por la comisión de los delitos establecidos en la presente ley."*

**Artículo 64.** Se reforma el artículo 75, Disposición de los bienes incautados producto de la actividad delictiva, de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto número 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

***"Artículo 75. Disposición de los bienes incautados producto de la actividad delictiva.*** *Salvo que en sentencia el tribunal competente de conformidad con la ley de la materia haya declarado que no declare la extinción de dominio, los bienes incautados en procesos por delitos cometidos por grupos delictivos organizados, después de dictada la sentencia penal y que la misma contemple el comiso de los bienes secuestrados, la Corte Suprema de Justicia podrá acordar el destino de los bienes para uso de las autoridades encargadas de prevenir, controlar, investigar y perseguir dichos delitos."*

**Artículo 65.** Se agrega el artículo 83 Bis a la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto número 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

***"Artículo 83 Bis. Objeto de las medidas.*** *Si no se hubiere iniciado antes la acción de extinción de dominio conforme a la ley de la materia, una vez ordenadas las medidas a que se refieren los artículos 73, 74, 78, 79, 80, 83 de la presente ley, el Fiscal General tomará las medidas necesarias para que el Ministerio Público inicie la investigación y ejerza la acción de extinción de dominio en la forma prevista en la ley. La acción de extinción de dominio tendrá preferencia a cualquier otro procedimiento que contemple la presente ley de igual o similar naturaleza."*

**Artículo 66.** Se agrega un segundo párrafo al artículo 86, Ejecución de la medida, de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto número 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

*“Cuando proceda la acción de extinción de dominio conforme a la ley de la materia, no se admitirá el incidente sino en los términos que establece la Ley de Extinción de Dominio.”*

**Artículo 67.** Se reforma el artículo 89, Comiso, de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto número 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así:

*“Artículo 89. Comiso. Cuando los bienes producto del delito sean de ilícito comercio o de uso prohibido, el Ministerio Público podrá solicitar por vía incidental la extinción del derecho de propiedad o de posesión de los mismos por medio del comiso, a partir de que exista auto de procesamiento.*

*Cuando dichos bienes sean de ilícita procedencia pero de lícito comercio, el Ministerio Público iniciará la acción de extinción de dominio conforme a la ley de la materia.”*

**Artículo 68.** Se reforma el artículo 100 del Código de Notariado, Decreto 314 y sus reformas, el cual queda así:

*“Artículo 100.- Los Notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37, o de dar los avisos a que se contrae el artículo 38 de esta ley, dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirán en una multa equivalente al cien por ciento (100%) de los honorarios fijados conforme al arancel previsto en el Título XV de la presente ley, por infracción, que impondrá el Director General de Protocolos y se pagará en la Tesorería del Organismo Judicial, como fondos privativos de dicho Organismo.*

*Todas las sanciones fijadas por el Director General de Protocolos, se impondrán previa audiencia por el término de quince días al interesado, audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción, a la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el Director General de Protocolos, cabrá recurso de reconsideración, el que deberá interponerse dentro del término de tres días*

*contados a partir de la fecha de recepción de la notificación por correo certificado. Dicho recurso se interpondrá ante el propio Director, quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolverá aplicando el procedimiento de incidente previsto en la Ley del Organismo Judicial. Contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cabrá ningún otro recurso. Siempre que se declare sin lugar el recurso interpuesto, se impondrá al recurrente la multa prevista en el párrafo primero de este artículo aumentándole entre quinientos y tres mil quetzales, según sea el monto de la resolución recurrida."*

**Artículo 69.** Se adiciona un tercer párrafo al artículo 60, Comiso, del Código Penal, Decreto No 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así:

*"El comiso procederá únicamente en caso de que el juez o tribunal competente no declare la extinción de dominio conforme a la ley de la materia."*

**Artículo 70.** Se reforma el Artículo 108, Acciones nominativas y al portador, del Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República, el cual queda así:

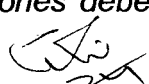
**Artículo 108. Acciones.** *Las acciones deberán ser nominativas.*

*Las sociedades anónimas constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarla únicamente con acciones nominativas.*

**Artículo 71.** Se reforma el Artículo 195, Sociedad en comandita por acciones, del Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República, el cual queda así:

**"Artículo 195. Sociedad en Comandita por Acciones.** *Sociedad en comandita por acciones, es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima.*

*Las aportaciones deber estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas.*





*Las sociedades en comandita por acciones constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarla únicamente con acciones nominativas."*

**Artículo 72.** Se reforma el Artículo 204, En sociedades accionadas, del Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República, el cual queda así:

**"Artículo 204. En Sociedades Accionadas.** *En las sociedades accionadas se podrá acordar el aumento de capital autorizado mediante la emisión de nuevas acciones o por aumento del valor nominal de las acciones, en ambos casos las acciones deberán ser nominativas.*

*La emisión, suscripción y pago de acciones dentro de los límites de capital autorizado, se regirá primero por las disposiciones de este Código y a falta de disposiciones en el mismo, por las disposiciones de la Escritura Social."*

**Artículo 73. Transitorio.** Se establece el plazo de dos (2) años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para que las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, reguladas en el Código de Comercio, Decreto número 2-70 del Congreso de la República, que hayan emitido acciones al portador antes de la vigencia del mismo, procedan a efectuar el respectivo cambio por acciones nominativas.

Dentro del plazo de treinta (30) días después del vencimiento del plazo de dos (2) años, las sociedades mercantiles deberán dar un aviso al Registro Mercantil General de la República de haber dado cumplimiento a esta disposición, informando en su caso, de las acciones al portador que no se hubieren cambiado.

Vencido en plazo de dos (2) años, sólo podrán ejercerse los derechos que incorporan las acciones nominativas. En el caso de las acciones que no hubieren sido cambiadas, deberá seguirse el procedimiento estipulado en el artículo 129 del Código de Comercio de Guatemala, Decreto número 2-70 del Congreso de la República, para la reposición de acciones al portador.

El Registro Mercantil General de la República verificará el cumplimiento de lo establecido en este artículo, conforme los procedimientos que implemente para el efecto.



**Artículo 74. Vigencia.** El presente Decreto fue aprobado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de Diputados al Congreso de la República, y entrará en vigencia a los ocho (8) días de su publicación en el Diario Oficial.

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN, EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE DOS MIL DIEZ.

